

# CRONICA DEL MES

Junio-1980



Los acontecimientos del mes de junio parecen evidenciar que se ha iniciado una nueva etapa en la lucha entre el gobierno y la izquierda organizada. Si bien no es hasta entrado el mes cuando se hace pública la unidad al más alto nivel, con la creación de la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU), integrada por las FPL, las FARN, el ERP y el PCS (que anuncia la creación de su brazo armado: Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, que dice llevar ya un año de acciones) y emite un comunicado en el que llama a todas las fuerzas democráticas, incluso a los elementos progresistas de la Fuerza Armada; sin embargo la creación de dicha dirección unificada es del 22 de mayo, y en el mes de junio impulsa un nuevo tipo de acción, en lo militar, en lo laboral, en lo político, y en lo diplomático internacional.

Si alarmaba el número de muertos del mes de mayo, en este mes, aunque es bastante inferior, pero resulta muy elevado, aunque la correlación comienza a ser muy distinta. En junio, de acuerdo a los periódicos y partes de guerra hubo 2.092 muertos por causa de la violencia, de los que 1.149 fueron víctimas causadas por la derecha y por el aparato militar y para-militar del gobierno (1.028 de la población civil y 131 caídos en enfrentamientos), mientras 943 fueron víctimas causadas por acciones político-militares de la izquierda (191 ajusticiados, y 752 bajas en enfrentamientos). Las víctimas de ambos bandos se emparejan mucho en este mes, contra lo que venía ocurriendo anteriormente, pero las bajas en enfrentamientos son muy superiores en el bando oficial en comparación con el bando insurreccional.

El mayor número de bajas de la población civil se debió a la intensificación de operativos militares, en reacción a los enfrentamientos y en búsqueda de campamentos y bases de operación. Así, en el mes de junio se han reportado 69 invasiones militares a zonas rurales, 20 invasiones militares a zonas urbanas, 19 cateos o saqueos o sabotajes a locales obreros y estudiantiles, 16 ametrallamientos y atentados dinamiteros y 123 actos de destrucción y/o incendio de casas campesinas.

Por su parte, las organizaciones político-militares han realizado 295 acciones armadas por

toda la República: 111 en el Departamento de San Salvador (San Salvador, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Apopa, Santiago Texacuangos, Soyapango, Ayutuxtepeque y San Marcos), 10 en el Dpto. de La Paz (Zacatecoluca, San Juan Nonualco, San Pedro Nonualco), 11 en el de San Vicente (San Vicente, Tecoluca, Verapaz, Guadalupe, San Esteban Catarina), 15 en el de La Libertad (Santa Tecla, Tacachico, Quezaltepeque, Ciudad Arce, La Libertad, Colón, San Juan Opico), 15 en el de Chalatenango (Chalatenango, Arcatao, Las Vueltas, San Antonio Los Ranchos, San Francisco Morazán y Potonico), 19 en el de Cuscatlán (Cojutepeque, Suchitoto, San Marcos Lempa, San Bartolomé Perulapía, Tenancingo y San José Guayabal), y 6 en el de Cabañas, para la zona central del país (Tejutepeque, Sensuntepeque, Cinquera e Ilobasco); en cuanto a la zona occidental, 44 en el Departamento de Santa Ana (Santa Ana, Chalchuapa, Coatepeque, Texistepeque, Metapán y Candelaria La Frontera), 17 en el de Sonsonate (Sonsonate, Izalco, Armenia y Nahuilingo), y 5 en el Depto. y ciudad de Ahuachapán; en cuanto a la zona más oriental del país, hubo 7 acciones en el Depto. de Usulután (Usulután y Jiquilisco), 18 en el de San Miguel (San Miguel, Ciudad Barrios, El Cuco, Playas Negras, San Rafael Oriente y Chirilagua), 14 en el de Morazán (Morazán, Perquín, Osicala, Jocoaitique, Torola, Meanguera, Cacaoopera y San Simón), y 3 en el Depto. y ciudad de La Unión.

Todo esto denota, por un lado, la intensificación de las acciones armadas, que se han generalizado y profundizado en el país en el presente mes, así como también el elevado número de bajas en enfrentamientos, aunque los partes de guerra del COPREFA apenas den cuenta de las acciones, y mucho menos de las cifras de muertos, limitándose a publicar de vez en cuando algunas esquelas mortuorias de uno que otro oficial, clase o número caído en cumplimiento de su deber. Sin embargo, los repetidos aterrizajes de helicópteros en la avenida Roosevelt, ante el hospital militar, evidencian la agudización de la lucha. El país, por lo tanto, se encuentra en verdadero estado de guerra, que no se puede ocultar ante tales hechos.

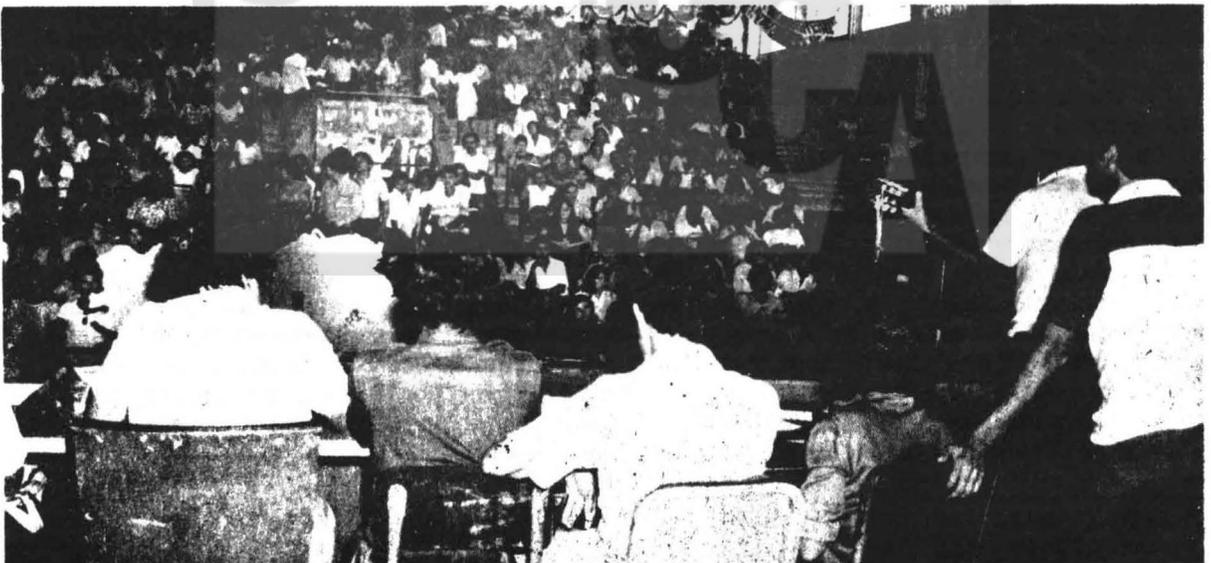
En el campo puramente laboral también se intensifica la lucha o la conflictividad. Dejando para la sección de lucha política el Paro Nacional de dos días, apreciamos que la conflictividad laboral se muestra muy elevada. El Comité de Defensa de los Pacientes y Trabajadores de las Instituciones de Salud, que desde el mes anterior estaba en paro por la violación de los derechos más elementales, los atropellos y asesinatos de pacientes en los mismos hospitales, o de médicos y demás personal, siguieron en esa actitud la mayor parte del mes, lo cual no impidió que el 13 de junio fuera asesinado otro herido en la sala de cirugía del hospital de Santa Ana; días más tarde fueron masacradas 8 personas en una casa particular, 3 de ellas médicos y una enfermera, oficialmente porque había una "clínica clandestina", pero que en realidad fue una acción de la Policía Nacional contra personas indefensas y en ropa de dormir, e incluso el Dr. Matamoros, que acudió en ayuda profesional y se identificó como médico, fue invitado a pasar y asesinado también.

También plantearon paros y huelgas: ASE-POJ (empleados del Poder Judicial), los trabajadores del Centro Nacional de Artes, los Supervisores Docentes, el personal de Ciudad Normal, los Docentes Técnicos de los Bachilleratos Diversificados, ANDES, AEME (empleados del Ministerio de Educación, más de 7.000), LPO (2.000 trabajadores de Agromán), STECEL (de la electricidad), STIRA (los trabajadores del IRA), el FSR (en las plantas de Coca-Cola y Cartotécnica Centroamericana, S. A.), AEAS (empresarios de buses), y FESINCONSTRANS (en El Granjero).

Plantearon pliegos de peticiones y demandas a las autoridades o a las empresas, amenazando de paro, o se solidarizaron con otros paros ya establecidos: FENASTRAS (en Pisos y Resinas S. A.), ATRHA, AGEPE, UCS, STITAS, el Cuerpo de Médicos del Hospital Rosales, ANDES y SUTC.

Frente a tal conflictividad laboral, el gobierno viene amenazando desde comienzos del mes de que va a derogar la Ley de Servicio Civil (que propugnara hace años la Democracia Cristiana) y emitir en sustitución un Decreto de Estado de Emergencia que posibilitaría la militarización de los servicios básicos. A la vez, Abdul Gutiérrez y Morales Erlich anuncian que no habrá mas aumentos salariales, pues la economía del país no los permite.

Esta presión del gobierno no impide que ANDES plantee la posibilidad del cierre definitivo de todos los centros de educación media del país, pues ya van más de 80 maestros asesinados en el presente año (de hecho, en el campo, muchas escuelas están cerradas, e incluso en las ciudades hay gran ausentismo de maestros y de alumnos). AEAS, por su parte, anuncia un paro progresivo de los buses urbanos, a partir del lunes 23, ya que no se les da el subsidio prometido. Se integra en esos días al Comité de Unidad Sindical (CUS), con el FSR, FUSS, CUTS y STISS. Las principales Federaciones Sindicales dirigen una carta a Mons. Rivera, en la que se muestran preocupadas por el cambio de actitud que ha tomado la Iglesia desde el asesinato de Mons. Romero, e insisten en que se siga su línea, pues de lo contrario la Iglesia quedará al margen del proceso histórico.





Incluso la Unión Comunal Salvadoreña (UCS), la única organización campesina que apoya al actual gobierno, y que participa en la Reforma Agraria, le presenta a éste una plataforma reivindicativa político-económica, firmada por 8 seccionales departamentales; asimismo, publica una aclaración sobre los sucesos de la hacienda San Francisco Guajoyo, afirmando que los 12 asesinados no eran guerrilleros sino cooperativistas de la UCS, y que fueron asesinados por la Guardia Nacional. Algunos de los fundadores de la UCS, por su parte, huyen a Nicaragua, ante la situación nacional y en protesta por la represión.

A parte de la lucha militar y laboral, también se agudiza la lucha política. El gobierno utiliza básicamente dos mecanismos: la represión y el control férreo de los medios de comunicación. La oposición utiliza nuevas tácticas, la principal de ellas el Paro Nacional de dos días.

Se inicia el mes con la renovación del Estado de Sitio, y se intensifica la "despistolización", lo que da pie a retenes, cateos, registros, etc. Se llega a correr el rumor de que las mujeres con pantalones y zapatos tenis son víctimas de atentados de la autoridad, que les rasga o les quita los pantalones y aparecen dos cadáveres de mujeres vestidas así en el parque Hula-Hula; inmediatamente se da el desmentido oficial por los medios de comunicación. El COPREFA emite partes de

guerra en los que comunica grandes acciones de descubrimiento y desmantelamiento de campamentos guerrilleros y de bases de operaciones y fabricación de armas y de propaganda. Igualmente, se pasan por TV y por otros medios, escenas de refugiados campesinos que huyen de masacres y amenazas subversivas y buscan refugio en cuarteles y poblados defendidos. De hecho se dan grandes huidas de campesinos de San Juan Opico, Chalatenango y zona norte, San Vicente, etc., y se intensifica la migración al exterior, ya sea a USA, México, Costa Rica, y sobre todo a Honduras, donde según informes oficiales de aquel país hay más de 3.500 refugiados salvadoreños.

Dentro del esquema de represión, la Iglesia vuelve a ser víctima. el P. Cosme Spezzoto es asesinado en la Iglesia de San Juan Nonualco poco antes de comenzar su misa de la tarde. El colegio de la Sagrada Familia sufre un operativo combinado con cateo y allanamiento, tras el que se llevan detenidos a una religiosa y a 4 empleados de la institución. Al finalizar el mes el Ejército Anticomunista Salvadoreño (EAS) detona dos potentes bombas en la UCA, una en la imprenta y la otra en el local de la Sociedad de Estudiantes de Ciencias Económicas.

Del mes anterior viene pendiente el caso del ex-Ministro de Educación, Salvador Samayoa. El 3 de junio se dicta una resolución por la que se

deja en libertad a la Srta. Paula Pike Tennat, mientras se retiene a Samayoa. Pasa todo el mes sin que se solucione el caso, y se superan todos los plazos legales con una elasticidad explicable únicamente por razones políticas. Al comienzo no se permiten ni visitas ni defensa, ni hay quien se atreva a tomar su caso entre todos los abogados, más adelante será su propio padre quien se encargue de la defensa y por esa razón se le permita visitarlo.

Por último, la agencia internacional de noticias API NEWS, vinculada con el periódico de oposición EL INDEPENDIENTE, sufre un coteo, que motiva los editoriales airados de su director.

Pero es en el campo de los medios de comunicación masivos donde se libra una gran campaña del gobierno, principalmente con dos sucesos de relieve. El 15 de junio aterrizan dos aviones, y uno de ellos sufre un accidente; en él se encuentran armas y municiones para la guerrilla, y la matrícula del avión es panameña. Este hecho constituye un acontecimiento insólito, y provoca una reacción airada y violenta. El Ministro de Defensa aparece en TV en actitud distinta a su modo ordinario, calmado y sereno, y denuncia apasionadamente posibles complicidades y traiciones de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Venezuela; exhorta al patriotismo y a la defensa nacional, y manda se derribe todo avión que no se identifique. ¿Será el primer caso de suministro por aire, o será una casualidad que ha mostrado la incapacidad del gobierno para impedir esos vuelos y la debilidad del mismo?

El otro suceso es el caso de Julián Ignacio Otero, presunto miembro de las FPL, que dice haberse entregado a la Guardia Nacional, a la que alaba desmesuradamente, y denuncia personas e instituciones, entre ellas la Iglesia, la UCA y los jesuitas, como mediadores incluso en la compra de armas por medio de sus cuentas bancarias. El "show Otero", tanto por sus antecedentes personales, como por la manera de hablar, las incongruencias entre los datos, hicieron recordar a los famosos "testigos" presentados por D'Abuison, que se desmienten por sí mismos, tanto que no eran necesarios los desmentidos de las FPL ni de Mons. Rivera. Pero la táctica, en vísperas del Paro Nacional, sugería acciones represivas que se darían a continuación, como lo confirmó la experiencia de los hechos.

Mientras la extrema derecha se opone incluso al gobierno —Mena Lagos, uno de los dirigen-

tes del FAN hace declaraciones en Washington en las que acusa a los Estados Unidos de ser los responsables de la guerra civil en El Salvador por no permitir al ejército terminar de una vez con la oposición; y los hermanos Raubusch, uno de ellos directivo del FAN, son asesinados en su negocio por el PRTC, que no es miembro ni de la Coordinadora ni del Frente—, el gobierno gana cierto apoyo de la derecha moderada. El presidente saliente de ANEP, en su discurso de despedida, ofrece un moderado apoyo a la Junta y al Plan Nacional de Emergencia, lo mismo que la Cámara de la Construcción y la recientemente creada Alianza Productiva (integrada por las mismas instituciones de siempre, más FENAPES que andaba en contactos con el Frente).

Sin embargo, hay una serie de sucesos que agudizan el debilitamiento del régimen, y no tanto por el hecho de que otro hijo de Morales Erlich, Carlos Ernesto, se pase a las FPL y le dirija una severa carta a su padre, casi al mismo tiempo que el mayor, José Antonio, sea capturado por la policía junto con otros 5 miembros de las FPL. Un grupo de 174 miembros de Concejos Municipales denuncian al asesinato de 9 alcaldes, r.o a manos de la extrema izquierda, manifiestan su preocupación y desamparo, y amenazan con renunciar, a la vez que exigen garantías. El alcalde de Santa Ana también renuncia, y publica una vehemente carta de denuncia de la represión del gobierno. El Concejo Municipal de Ciudad Arce renuncia en pleno a causa del asesinato del alcalde. 32 Municipios de Chalatenango también exigen a la Junta garantías y protección, y amenazan con renunciar. Si las municipalidades y la UCS ya no apoyan incondicionalmente al gobierno, se sienten amenazadas, y amenazan con retirarse, el apoyo que éste tiene se reduce a la nada.

Por su parte, la oposición concentra su lucha, principalmente, en el Paro Nacional anunciado por la Coordinadora Revolucionaria de Masas para los días 24 y 25 de junio, con una serie de objetivos políticos y reivindicativos para los distintos grupos que lo secundan. Desde su anuncio cuenta con el apoyo del Frente Democrático Revolucionario, del CUS, STECEL y AGEPYM; los colegios católicos mantendrán cerrados sus centros "por seguridad".

El Paro Nacional fue un golpe tan duro para el gobierno que motivó un gran despliegue en los medios de comunicación. A la TV acudieron el Ministro y el Sub-secretario de Defensa, varios

miembros de la Junta, entre ellos Abdul Gutiérrez y Majano, y el alcalde capitalino Rey Prendes. Todos atacaron el paro como anti-patriótico y catastrófico económicamente, exhortaron a acudir al trabajo y aseguraron protección. De hecho, la capital estaba militarizada, con intenso patrullaje. Pero había sido planteado como algo pacífico, y hubo tranquilidad. Morales Erlich, al evaluarlo, insistió en que la gente no había ido a trabajar por miedo.

Según la Prensa Internacional, fueron al paro 100.000 obreros industriales, 25.000 empleados públicos, 30.000 maestros, 100.000 jornaleros del campo, más los trabajadores de gasolineras, hospitales, transporte y comercio. El primer día las ciudades, en especial la capital, estaban desiertas, y el segundo día remitió un poco, percibiéndose algo más de movimiento.

El golpe asestado al gobierno por el Paro provocó una reacción de represión muy fuerte. El día 26 de junio, a primeras horas de la mañana, un operativo militar a un barrio marginado contiguo a la Universidad Nacional, La Fosa, en el que hubo numerosos muertos, dio la excusa para que la Guardia Nacional penetrara en el recinto universitario, aduciendo que les habían disparado desde su interior. En ese momento se encontraba la Coordinadora allí ofreciendo una conferencia de prensa sobre los resultados del paro, y había más de 5.000 trabajando, entre estudiantes, docentes y empleados. Un operativo aún mayor se tomó la Universidad, en cuya acción hubo más de 40 muertos, y en el instituto adjunto la TV extranjera y radios internacionales presenciaron y grabaron el asesinato de un niño indefenso que clamaba piedad, a manos de la Guardia Nacional que ya había asesinado a otros jóvenes allí mismo. La universidad fue intervenida; al día siguiente, ante la negativa de las autoridades y del arzobispado a presenciar el cateo, rompiendo puertas penetraron a todos los locales, donde no encontraron armas en un comienzo, aunque luego se hacía propaganda de que había incluso cámaras de tortura (laboratorios) y subterráneos (el sistema de alcantarillas). El saqueo y los destrozos inconcebibles de expedientes, archivos, computadora, laboratorios, muebles, maquinaria, etc., parecen ser uno de los problemas para devolverla a las autoridades constituídas.

Otra secuela del Paro fue la publicación inmediata de dos nuevos decretos: el de Reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal, para incluir los delitos de "terrorismo", que no esta-

ban tipificados (incluidas las tomas de iglesias), y el Decreto 296, para los Empleados Públicos, por el que se les prohíbe la sindicalización y las huelgas, cumpliéndose así en la práctica la amenaza del Estado de Emergencia.

Por otro lado, la crisis económica del país se hace cada día más aguda. El gobierno monta una gran campaña publicitaria de la puesta en marcha del Plan Nacional de Emergencia, que supone 2.380 millones de colones y la creación de 180.000 nuevos puestos de trabajo. Se multiplican las reuniones con distintas instituciones e instancias, para explicar el Plan y para animar sobre todo a la Empresa Privada. Dado que la mayor parte de tales recursos provendrán de créditos externos, la situación económica del país se hace aún más dependiente, y compromete el futuro de cualquier proyecto político venidero. De hecho, el Plan tiene cierto apoyo del exterior, en especial de los Estados Unidos. En el mes de junio se conceden los siguientes créditos internacionales: AID concede 10 millones de colones para la pequeña empresa; la Banca Europea concede a COPAL 8 millones de dólares para créditos de avío de la cosecha 79-80; se firma un convenio con USA para la compra de 18.000 Tn. de trigo por valor de 3 millones de dólares; el BIRF le concede un crédito al Ministerio de Trabajo (no se dice el monto) para el Centro de Formación Profesional de San Salvador; AID concede otro crédito (no se dice el monto) al BCR/FENAPES para reactivar la pequeña empresa; la Embajada USA le da a la Cancillería un crédito de 3 millones de dólares para la compra del trigo; el FMI le concede al BCR 12 millones de dólares para fortalecer las reservas internacionales (10.75 millones) y para normalizar la exportación del café (1.25 millones); AID le otorga un crédito al Ministerio de Obras Públicas (no se dice el monto) para generar empleo en el sector público.

Sin embargo, la economía no parece reactivarse, como se aprecia por los datos siguientes. Según datos oficiales, se ha dado una baja en la producción y cultivo de la caña de azúcar de 2.1 millones de qq, en la última zafra respecto a la anterior; igual en el algodón: 1.55 millones de qq. menos y 0.9 millones de qq. en semillas; la producción agropecuaria se ha visto disminuida por la violencia; también se ha reducido notablemente la recaudación de impuestos por los cierres de fábricas y comercios y por la paralización. Más de 100 empresas han sido cerradas en lo que va del año; la fuga de divisas ha reducido en un



70% los depósitos en los bancos salvadoreños. La inflación es casi galopante, sin que las medidas gubernamentales logren detenerla (el frijol se ha vendido a por lo menos 1.25 ¢ la libra). Por otro lado, han bajado los precios internacionales del café, que es el principal rubro de exportación del país. El FMI declaró que en El Salvador el PNB decayó en 3.5% de 1978 a 1979, mientras la inflación subió del 15 al 24% en el mismo período. Si bien se habla oficialmente del aumento de la producción de alimentos, el IRA anuncia por su parte la importación de 100.000 qq. de arroz de los Estados Unidos y de 8 millones de Kgs. de leche en polvo.

Entre tanto, el gobierno emite el decreto 237, por el que se crea INAZUCAR, la institución encargada de la comercialización exclusiva del azúcar en el extranjero y el interior del país. También se canalizan 331 millones de colones (provenientes de fuentes internas y externas), en créditos para reactivar la industria de la construcción.

Finalmente, en el plano internacional también hay gran densidad de actividades que afectan al país. Los Estados Unidos forman un bloque de apoyo al régimen, basándose principalmente en Costa Rica y Venezuela, que puede arrastrar al Pacto Andino, además de la actitud de los gobiernos de Guatemala y Honduras, a los que los problemas de El Salvador les afectan muy directamente. Llueven acusaciones de que hay intervencionismo del comunismo, sobre todo a tra-

vés de Cuba y Nicaragua; por su parte, el FDR, Nicaragua y alguien más denuncian la intervención de USA en El Salvador, directa y a través de los países citados. Por su parte, el Presidente de Costa Rica, Carazo, pretende ser el vocero de los Estados Unidos en el caso de El Salvador, en sus giras por diversos países, incluso de Europa, previa entrevista con Morales Erlich en San José. Ante la denuncia de una posible intervención del Pacto Andino, el Embajador de El Salvador en Venezuela afirma que aunque ese país concedió un préstamo de 20 millones de dólares, su ayuda sólo es "moral", y que Aristides Calvani está en El Salvador como Secretario General de la Organización Demócratacristiana Americana (ODCA). Incluso Videla se muestra preocupado por El Salvador y promete el apoyo argentino (que no se especifica). El peligro de la intervención norteamericana en el país es también manifestado por US News and World Report, y por Richard Millet.

Mientras tanto, se aceleran los pasos para el arreglo del conflicto con Honduras, y aunque renuncia el Ing. hondureño Camilo Gómez porque ve que se van a traicionar los intereses de su país, el canciller Pérez Cadalso afirma que no hay presión de USA para el arreglo. No hay duda de que un arreglo facilitaría las cosas para una acción conjunta de los ejércitos de ambos países en la lucha contrainsurgente, como lo denunciaron el clero y religiosas de la diócesis de Copán en la masacre de más de 600 campesinos indefensos de El Salvador en el río Sumpul, que se apresuró a

desmentir el gobierno de Honduras y el coronel García de El Salvador, como propaganda de la izquierda o como falta de patriotismo de una mayoría religiosa extranjera, pero que la Conferencia Episcopal Hondureña ratificó como verídica.

El FDR envió desde finales de mayo una serie de misiones a los distintos países de América y de Europa, para presentar sus puntos de vista, y ganar simpatías y apoyo al gobierno democrático revolucionario. El presidente del PRI, en México, pidió a su gobierno que rompiera relaciones con el de El Salvador; la Internacional Socialista, reunida en Oslo, brindó su apoyo incondicional al FDR, lo mismo que Willy Brand; pero los medios de comunicación nacionales desconocieron esos viajes. Para contrarrestar el impacto, la Junta también envió misiones a distintos países de América y Europa, logrando el apoyo de la facción más derechista de la Democracia Cristiana Europea, sobre todo de Alemania Occidental; mientras en España el PSOE protestaba públicamente porque se permitía la visita de Duarte y un grupo de militares, ya que representaban a un gobierno represivo y violador de todos los derechos humanos; pero estas giras

fueron totalmente cubiertas y panegirizadas por los medios de comunicación nacionales. Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores creaba la Dirección de Cultura e Imagen de El Salvador, para contrarrestar la mala imagen que los subversivos dan del país en el exterior. Algo imprevisto resultó el viaje de Majano a Panamá, para entrevistarse con Torrijos y Royo, que le enviaron el avión presidencial; esto sugiere un cambio de la política panameña-estadounidense en apoyo de Majano que acababa de ser suplantado por Abdul Gutiérrez.

Por último, las acciones esporádicas contrarrevolucionarias en Nicaragua, el comienzo de crímenes políticos y represión en Honduras, y la agudización de la violencia en Guatemala, parece tender un cerco aislante a Nicaragua, y de contención al proceso revolucionario salvadoreño.

Un mes, por tanto, de gran intensidad en la lucha en todas sus formas, que denota una nueva etapa en las acciones de la izquierda, y que pone en la defensiva al régimen salvadoreño.

**Eugenio C. Anaya h.**